

NUE 93-ADP-2018 (AC)

[REDACTED] contra la Policía Nacional Civil

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las trece horas con quince minutos del veintidós de agosto de dos mil diecinueve.

A. Descripción del Caso

I. El apelante [REDACTED], en adelante el apelante, presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la **Policía Nacional Civil (PNC)**, solicitud de datos personales conforme al Art. 36 letra "d" de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), relativa a: "suprimir definitivamente su antecedente delincuencia en su solvencia de antecedentes policiales", ya que, al solicitarla le aparece el delito de "estupro", cuya acción penal le fue declarada extinta y consecuentemente fue rehabilitado en sus derechos de ciudadano; solicitó solvencia de antecedentes policiales para trámites de transporte.

O.C

En relación con ello, el oficial de información de la **PNC** resolvió: "(...) en atención a todo lo antes expuesto, se considera que no es procedente acceder a lo solicitado (...), esto en razón, que a partir de dichos antecedentes y del contexto de los mismos, se infiere en la existencia de un peligro real e inminente en cuanto a que el solicitante podría utilizar dichos documentos para sorprender a las instituciones Públicas encargadas de la autorización de permisos, licencias, prerrogativas o ingresos a entidades Estatales (...) lo cual iría en detrimento de la seguridad pública, el mantenimiento del orden y la paz pública y consecuentemente, en perjuicio de derechos de terceras personas".

II. El apelante interpuso el recurso de apelación ante este Instituto conforme al Art. 38 de la LAIP, el cual fue admitido, designándose al comisionado Max Fernando Mirón



Alfaro, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución. Sin embargo, al finalizar su periodo, fue reasignado al Comisionado José Alirio Cornejo Najarro.

La PNC rindió informe justificativo de conformidad con el Art. 88 de la LAIP, por medio del cual ratificó lo resuelto por el oficial de información de la Institución.

III. La audiencia oral, se desarrolló únicamente con la comparecencia del apoderado del ente obligado, el licenciado José Roberto Escobar González y se hizo constar la incomparecencia del apelante, pese a haber sido legalmente notificado.

Por su parte, el apoderado de la PNC ratificó lo resuelto por el oficial de información de la institución y lo expuesto por la entidad en el informe justificativo.

En ese sentido, agregó que la negativa a eliminar el antecedente delincucional de la apelante, respecto al delito de estupro, se encontraba justificada en la Directiva para Normar la Emisión de Solvencias de Antecedentes Policiales y la Constancia de Antecedentes Policiales; emitida por el Director General de la PNC, en la cual se enuncia un catálogo de delitos —graves y muy graves—, que se deben hacer constar en los referidos documentos.

B. Análisis del Caso.

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** Una breve referencia al derecho a la protección de datos personales, y en específico al derecho de cancelación y el principio de confidencialidad; **(II)** Consideraciones sobre los antecedentes policiales que registran las personas condenadas y rehabilitadas; **(III)** Se analizará la procedencia de la cancelación del dato personal negativo de la apelante, conforme a las normas legales pertinentes.

I. De acuerdo a la resolución definitiva emitida por este Instituto en fecha 9 de marzo de 2018, en el procedimiento de imposición de sanciones de referencia NUE 3-DDP-2017, por dato personal se entiende toda aquella información relativa a un individuo identificado o identificable que, entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Asimismo, señalan aspectos

sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de su domicilio, teléfono, sus características físicas, ideología o vida sexual, entre otros¹.

A. Asimismo, el Art. 31 de la LAIP establece que el derecho a la protección de datos personales, consiste en que: *“Toda persona, directamente o a través de su representante, tendrá derecho a saber si se están procesando sus datos personales; a conseguir una reproducción inteligible de ella sin demora; a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean injustificados o inexactos y a conocer los destinatarios cuando la información sea transmitida, permitiéndole conocer las razones que motivaron su petición, en los términos de esta ley. El acceso a los datos personales es exclusivo de su titular o su representante”* (la negrita es nuestra).

En ese orden de ideas, la Sala de lo Constitucional en la sentencia definitiva de amparo del día 4 de marzo de 2012 de referencia 934-2007, reconoció que la protección de los datos personales, es el medio por el cual se salvaguardan los objetivos de la faceta material del derecho a la autodeterminación informativa, por un conjunto de derechos subjetivos, deberes, principios, procedimientos, instituciones y reglas objetivas, teniendo este su fundamento en la seguridad jurídica Art. 2 de la Constitución de la República (Cn); asimismo, estableció que la protección de este derecho, pretende satisfacer la necesidad de las personas de preservar su identidad ante la revelación y el uso de los datos que les conciernen, y que este no puede limitarse a determinado tipo de datos —sensibles o íntimos—, lo decisivo es la utilidad y el tipo de procesamiento que de los mismos se haga, pues se requiere conocer el contexto en que se utiliza o se pretenda utilizar.

Por ello, el grado de sensibilidad o intimidad del dato personal ya no depende de si afecta o no la esfera íntima o privada de la persona; hace falta conocer la relación de utilización de un dato para poder determinar sus implicaciones con el individuo; es decir, determinar la verdadera finalidad y qué posibilidades de interconexión y de utilización existen; solo así se podrá descifrar la licitud de las restricciones al derecho a la autodeterminación informativa o protección de datos personales.

¹ Concepto retomado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales de los Estados Unidos Mexicanos (INAI), en su resolución de fecha 1 de febrero de 2017, de referencia RRA 3995/16.



Este derecho también se encuentra reconocido en los tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico salvadoreño, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 17), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 11), al interpretar estas disposiciones, los Organismos Internacionales han destacado la noción de las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos.

B. Por otro lado, es pertinente señalar que dentro de esos derechos subjetivos que componen el derecho a la protección de datos personales, se encuentra el derecho de cancelación o supresión (Art. 36 letra “d” de la LAIP), que de acuerdo a la Jurisprudencia Constitucional es la facultad que se otorga a un individuo para que solicite la eliminación de sus datos de carácter personal de las bases que tenga un ente determinado, *“por la falta de relevancia y actualidad de la información para los fines que fueron recabados o, simplemente, por el propósito de permitir al titular que recupere la disponibilidad sobre cualquier faceta de su personalidad y de su datos íntimos o estrictamente privados”*².

En ese contexto, como evolución al derecho de cancelación, se encuentra anclado el denominado “Derecho al Olvido” o “Derecho a la Caducidad del Dato Negativo Verdadero del Pasado”, el cual se define como el derecho que tiene el titular de un dato personal a **borrar, bloquear o suprimir esa información personal**, que de alguna manera afecta el **libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales**, como el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, o que podría considerarse como **información obsoleta**, pues carece de sentido que se tenga acceso a ella **después de mucho tiempo**, y ya no sirve a los **fines** para los que fue recabada (principio de finalidad).

C. Ahora bien, en la sentencia definitiva de la Sala de lo Constitucional del 8 marzo de 2013, en el proceso de Inconstitucionalidad 58-2007, se reconoció que el derecho a la autodeterminación informativa (o protección de datos personales), -que comporta diferentes facultades de controlar sobre el uso de la información personal que le atañe, tanto en su recolección como en su tratamiento, conservación y transmisión-, no es ilimitado. Las

² Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional, en el Amparo del día cuatro de marzo de 2012 de referencia 934-2007.

personas individuales o colectivas carecen de derechos fundamentales absolutos sobre sus datos. Esta es la razón por la que el individuo debe tolerar límites a ese derecho, en razón de un interés general.

Del mismo modo, se acotó que las restricciones o limitaciones pueden encontrarse justificadas en la finalidad que persigue la recolección y administración de los datos personales, la cual debe ser legítima (constitucional o legal), explícita y determinada. Para ello el legislador debe tener en cuenta no solo el principio de proporcionalidad, sino también el derecho general del ciudadano a la libertad frente al Estado, que solo puede ser restringido por el poder público cuando sea indispensable para la protección del interés general. Y es que la fuerza obligatoria del derecho constitucional se manifiesta, en primer lugar, en la prohibición de emanar normas contrarias a la Constitución.

Por lo que, en cada caso en concreto, se debe dejar claro el alcance del límite a derechos, y no quedando sujetos a fórmulas interpretativas que restrinjan un derecho más allá del alcance planteado por el legislador.

D. Es importante señalar que el derecho a la protección de los datos personales se encuentra informado por una serie de principios, en el que resalta para el caso en concreto: el principio de confidencialidad (Art. 36 letra “d” de la LAIP).

Este se define como la obligación del responsable del registro de las bases de datos, de establecer controles o mecanismos para quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales mantengan y respeten el secreto de los mismos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el titular de los datos personales³.

En adición a este principio, se encuentran algunos métodos preventivos para salvaguardar la identidad, circunstancias o situaciones en las que una persona individual o jurídica se encuentra inmersa, por ejemplo, las reglas de anonimización, las cuales funcionan para facilitar el procesamiento de datos personales, pero a la vez para proteger al individuo

³ Disposición 23, de los “Estándares de Protección de Datos Personales” emitidos por la Red Iberoamérica de Protección de Datos, en Santiago de Chile, Junio 2017.



de un seguimiento de sus datos mediante la asignación automática de características que lo permitan individualizar.

También, se encuentra el bloqueo de los datos personales, que es el método que tiene como fin impedir su ulterior tratamiento o disposición, produciendo efectos similares al borrado físico de los mismos; esto procede cuando existe una imposibilidad técnica como por causa del procedimiento o soporte utilizado, también cuando una norma legal ordena la conservación de los datos personales y otorga únicamente su disposición a las autoridades públicas conforme a sus atribuciones y competencias, impidiendo que terceros tengan acceso a esos datos, garantizando la confidencialidad de los mismos, salvo que sean necesarios para garantizar razones de seguridad nacional, seguridad pública, orden público, salud pública o salvaguarda de derechos y libertades de terceros.

II. Establecido lo anterior, es pertinente mencionar que los antecedentes policiales son datos personales que derivan de los hechos tipificados en el vigente Código Penal u otras normas que establecen delitos o faltas, o de aquellos otros de carácter administrativo que han dado lugar por parte de la autoridad policial a la instrucción de diligencias y su posterior remisión a las autoridades judiciales o administrativas. Esos datos personales son registrados en soporte físico y electrónico sin el consentimiento de la persona afectada y susceptible de tratamiento.

Sin embargo, dichos datos son almacenados por la PNC, a raíz de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Orgánica de la referida Institución, el cual en su artículo 23 establece: “La PNC, para efecto de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica, podrá llevar un registro de antecedentes de las personas que hayan sido detenidas por atribuírseles la comisión de delitos o faltas. Asimismo, extender constancias o certificaciones de antecedentes policiales a las personas que lo soliciten”.

Es decir, de dicha disposición podemos inferir que el registro de antecedentes policiales, tiene dos finalidades específicas: 1) la de servir para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la PNC; y, 2) la de servir de soporte para la emisión de certificaciones o constancias de antecedentes a las personas que lo soliciten.

En el primero de los casos, el artículo 23 de la Ley Orgánica de la PNC, establece una serie de funciones que debe cumplir la PNC, las cuales en su mayoría están relacionadas con proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, mantener la paz, el orden, seguridad pública, prevenir la comisión de delitos, garantizar el cumplimiento de las leyes, acopiar y ordenar datos para la elaboración de una estadística nacional, entre otras.

En el segundo de los casos, para la emisión de certificaciones de antecedentes policiales de las personas que lo soliciten. En este supuesto es pertinente mencionar que en nuestro país las personas solicitan este documento, como requisito para adquirir alguna prerrogativa u obtener alguna concesión de cualquier tipo y además, cuando es requerido por otra Institución pública o de índole privada.

De ahí que, en la actualidad es una práctica constante que empleadores de cualquier naturaleza (público o privado) u instituciones soliciten el referido documento, como requisito para contratar a las personas en cualquier puesto o realizar alguna actividad justificándolo en el hecho de que la persona no tiene procedimientos penales abiertos en su contra, orden de captura, o pueda tener algún tipo de antecedente que pueda poner en peligro bienes jurídicos de la empresa o Institución. Es importante señalar que la presentación de solvencia policial, como requisito para acceder a un empleo o realizar otra actividad no se encuentra regulado en todas las ocasiones en ley en sentido formal y crea un estigma social, y le limita las oportunidades de estas personas, no permitiendo su reinserción social plena.

No obstante, la persona que posee antecedentes policiales por la comisión de cualquier tipo de delito, que ha cumplido la pena impuesta, y que fue rehabilitada en sus derechos de ciudadano por la autoridad competente —Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena—, tiene restablecidos sus derechos enunciados en la Constitución (Art. 75 inciso final de la Constitución).

Y es que, dada la anterior afirmación es menester traer a colación lo dispuesto en el artículo 27 inciso tercero de la Constitución de la Republica, en donde se regula la obligación del Estado, de organizar los centros penitenciarios con el objeto de corregir a las personas que han cometido un delito, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y prevención de delitos; para el cumplimiento de tal obligación se decretó la



Ley Penitenciaria, la cual en su artículo 6 regula el “Principio de Judicialización”, en virtud del cual toda pena se ejecutará bajo el estricto control del Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, y la Cámara respectiva, en su caso, quienes harán efectivas las decisiones de la sentencia condenatoria. El juez también controlará el adecuado cumplimiento del régimen penitenciario.

Asimismo, es atribución del citado Juez, declarar la extinción de la pena en los casos que proceda conforme al Código Penal y su norma procesal, tramitar y resolver el incidente de rehabilitación de los condenados por delito, entre otras; de tal manera, que determinado el cumplimiento de ciertos parámetros establecidos en la leyes penitenciarias, rehabilita al ciudadano en sus derechos; es decir, que dicha decisión no es automática, sino que el Juez debe comprobar ciertos requisitos para decretarlo. De esa forma, el ciudadano goza nuevamente de todos sus derechos.

Por otro lado, el Art. 36 letra “d” de la LAIP, establece que los titulares de los datos podrán solicitar la rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de la información que le concierna, según sea el caso, y **toda vez que el procedimiento para tales modificaciones no esté regulado por una ley especial.**

En ese sentido, este Instituto tiene la competencia legal para conocer y determinar conforme al Art. 29, 83 letra “a” y 96 letra “d” de la LAIP, sobre lo peticionado por el apelante. Asimismo, posee la competencia de velar por la correcta interpretación y aplicación de la LAIP conforme a su Art. 58 letra “a”; además, interpretar las normas a la luz de la Constitución, actitud que se exige no sólo para entes jurisdiccionales, sino de manera general para todo funcionario de acuerdo a la jurisprudencia contenciosa administrativa⁴ y en aplicación al Art. 235 de la Cn.

III. Una vez aclarado lo anterior, es preciso analizar los elementos vertidos en el presente procedimiento, para determinar la procedencia de la cancelación del dato personal negativo del apelante en su solvencia de antecedentes policiales.

⁴ Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo el 27 de junio de 2000, en el proceso de legalidad de referencia 157-M-99.

A. La LAIP en su Art. 32, establece deberes y reglas a los entes obligados, sobre el tratamiento de los datos personales en su poder, enmarcados en los principios que orientan el derecho a la protección de datos personales.

En ese sentido, establece como obligación en la letra b, el *“usar los datos exclusivamente en el cumplimiento de los fines institucionales para los que fueron solicitados u obtenidos”*, esta regla en consonancia con el principio de finalidad, que según jurisprudencia constitucional, *“los datos de carácter personal deben ser recogidos para alcanzar un objetivo lícito, es decir, deben ser utilizados para un fin específico y legítimo; por lo que una vez que este ha sido alcanzado la información debe cancelarse para impedir que sea utilizada en una finalidad distinta para la que se ha obtenido”*⁵.

B. Por otra parte, según lo dispuesto en la Directiva para normar la emisión de la solvencia de antecedentes policiales y la constancia de antecedentes policiales, emitida por la Dirección General de la PNC en julio de 2017, se reconoce en el romano VI “Normas: (1). Para la emisión de los documentos denominados solvencia de antecedentes policiales y la constancia de antecedentes policiales, la unidad de registro y antecedentes policiales (URAP) deberá consultar las bases de datos siguientes: a) personas detenidas del sistema imperium, b) detenidos PNC CIACDETENIDOS, c) disposiciones judiciales, y d) interpol.

En la misma normativa, se reconoce la emisión de los documentos en referencia, en virtud que son exigidos por distintas leyes, como requisito para trámites en instituciones públicas, para el otorgamiento de permisos o prerrogativas —Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, Ley de la Carrera Policial, entre otras-. Sin embargo, su uso ha sido retomado por las personas jurídicas o naturales quienes la solicitan para optar a empleo, estudio, retiro de tatuajes trámites migratorios, extranjería entre otros.

En esa línea, se advierte que una de las finalidades específicas de la emisión de la solvencia de antecedentes penales, es servir a diferentes instituciones públicas para verificar un requisito exigido en una ley en sentido formal para el otorgamiento de algún tipo de

⁵ Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional el 20 de octubre de 2014, en el proceso de amparo de referencia 142-2012.



permiso por parte del Estado; asimismo, es útil para otro tipo de actividades en las que se exige sin que deba necesariamente ser un requisito legal su presentación.

En ese sentido, la normativa dispone aquellos casos en los cuales la solvencia o certificación de antecedentes policiales será emitida haciendo constar que la persona carece de antecedentes policiales, entre estos se encuentran casos en los cuales la acción penal ha sido extinta por las figuras de sobreseimiento definitivo, conciliaciones o prescripción. Asimismo, establece que en el caso de los delitos graves a que se refiere el Art. 18 del Código Penal, en los que la extinción de la acción penal o de la pena haya sido por cumplimiento de la pena se hará constar el delito y su estado.

No obstante lo anterior, en la resolución emitida a las trece horas con quince minutos del 18 de octubre de 2018, bajo la referencia NUE 67-ADP-2017 (MM) este Instituto, estableció: “La Directiva emitida por la PNC, para la Emisión de Solvencias o Certificaciones, en los casos de personas condenadas, bajo los parámetros del Art. 18 del Código Penal, al momento de establecer que siempre se consignará el antecedente policial para cualquier finalidad, sin limitar su tiempo, está creando en cierta forma una pena perpetua prohibida por la Constitución en el Art. 27 inc. 2º de la Cn., y no permite la reinserción social que también proclama la Carta Magna”.

Bajo esa premisa, se ha reconoció como parámetros para determinar la procedencia o no, de la supresión de los antecedentes policiales que registra una persona, en el documento solvencia de antecedentes policiales, los siguientes: el tiempo que lleva rehabilitado en sus derechos de ciudadano y la finalidad con la cual fue requerido el documento.

Ello en atención, a que habrán situaciones en las cuales por el tipo de delito, deba seguirse consignando el dato por un periodo de tiempo pese a haberse declarado extinta la acción penal o rehabilitado en sus derechos de ciudadano; además, para identificar otro tipo de limitantes al derecho a la protección de datos personales establecidas en leyes que podrían estar relacionadas con la finalidad para la cual fue solicitada el documento, dichas limitaciones deben estar debidamente justificadas por razones de interés público o la protección de los derechos de la colectividad o grupos determinados.

En el presente caso, en atención a lo dispuesto en el Art. 36 letra d) de la LAIP, junto con su escrito de apelación [REDACTED] presentó los documentos siguientes: "a) solvencia de antecedentes policiales a su nombre, emitida el 21 de marzo de 2018, por la Unidad de Registro y Antecedentes Policiales de la PNC en la cual consta que registra el antecedentes policial de estupro y que el documento fue solicitada para transporte y b) copia simple de oficio emitido por el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, en el cual se establece que fue condenado por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador a cuatro años de prisión por la comisión del delito de estupro; asimismo, que se le extinguió la responsabilidad penal el 5 de diciembre de 2012 y fue rehabilitado en sus derechos de ciudadano el 14 de ese mismo mes y año.

En ese contexto, son elementos fácticos importantes considerar en el caso que nos ocupa que el apelante fue condenado a cuatro años de prisión por la comisión del delito de estupro, que se encuentra rehabilitado en sus derechos de ciudadano desde el año 2012 y que requirió su solvencia de antecedentes policiales para tramites de transporte.

Asimismo, en la resolución emitida a las trece horas con quince minutos, del 28 de enero de este año, bajo la referencia 65-ADP-2017 (HF), se estableció que previo a decidir sobre la supresión o confidencialidad de un antecedente policial es necesario analizar la normativa en materia penal; es decir, Código Penal, Código Procesal Penal y Ley Penitenciaria, pues existen supuestos en los cuales por el tipo de delito el legislador establecido reglas diferentes en relación al registro de antecedentes.

Al respecto, el Código Penal en su Art. 174-A dispone: la Dirección General de Centros Penales, para efectos preventivos y de política criminal, llevará un registro público de toda persona que haya sido condenada por cualquiera de los delitos contenidos en los capítulos I, II y III del título IV del libro de este Código.

Dicho registro tendrá una duración de cuatro años, contados después de haber cumplido la pena principal, que deberá contener una fotografía reciente del imputado, las generales de este, su lugar de última residencia y trabajo reportado, clasificación del delito o delitos por los que haya sido condenado, la pena que le fuere impuesta, y toda la información relativa a su rehabilitación. A dicho registro tendrá acceso la Fiscalía General de la



Republica, la Policía Nacional Civil, Los Tribunales Competentes, el Consejo Criminológico Nacional, El Departamento de Prueba y Libertad Asistida de la Corte Suprema de Justicia, El Concejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, El Ministerio de Educación y cualquier persona o institución que demuestre interés, podrá solicitar certificación del registro.

En esa línea, se advierte que dada la naturaleza de los delitos enunciados en los capítulos I, II y III del título IV del libro de este Código Penal y el bien jurídico protegido— libertad sexual—, el legislador consideró que, no obstante, la persona que cometió el ilícito penal haya cumplido la pena impuesta, los datos de este, deberán permanecer en un registro público, durante cuatro años, posteriores al cumplimiento de la pena.

Y es que, no debe dejarse de lado que la legislación penal tanto en materia sustantiva como en materia procesal, debe representar con énfasis especial, el objetivo primordial de tutela de los derechos fundamentales; por lo que, en sus normas se debe observar que para prevenir y sancionar la violación de cualquiera de los derechos fundamentales citados en el texto constitucional, éstos tienen verdadera tutela en el ámbito de la legislación penal; es por ello, que en el resguardo o tutela de los derechos fundamentales de la población salvadoreña es pues, materia de interés público.⁶

De tal forma, se ha reconocido que los derechos de las personas que se encuentren señaladas como actoras de un ilícito penal de gravedad, como a los que se refiere el Art. 174-A, del Código Penal, ven limitados sus derechos, ello con la finalidad de salvaguardar los intereses de la colectividad.

Ahora bien, [REDACTED] probó que habiendo cumplido la pena impuesta por el delito de estupro, el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, le extinguió la responsabilidad penal el 5 de diciembre de 2012. Por lo tanto, bajo los parámetros del Art. 174-A del Código Penal, el dato personal negativo del apelante,

⁶ Sentencia Definitiva de Inconstitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional el día 12 de abril de 2007, en el proceso de referencia 28-2006/33-2006/34-2006/36-2006.

ya no debe aparecer en el registro público al que se refiere tal disposición, ya que cumplió el periodo de cuatro años, el 5 de diciembre de 2016.

Por otro lado, en cuanto a la finalidad con la cual fue requerido el documento es un parámetro que debe analizarse aunado a la existencia de una ley en sentido formal en la cual se establezca como un requisito para determinada actividad que la persona carezca de antecedentes policiales o penales. En ese sentido, como se ha mencionado en la solvencia de antecedentes policiales presentada por el apelante, consta que requirió el documento para transporte; sin embargo, dada su incomparecencia a la audiencia oral relacionada con este caso, pese a haber sido notificado en debida forma no fue posible determinar la actividad específica de transporte o el tipo de transporte para la cual fue requerida.

Pese a lo anterior, se evidenció que ni la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ni su Reglamento, disponen que para realizar algún tipo de trámite regulado en dicha normativa es necesario presentar solvencia de antecedentes policiales o carecer de ellos, no existiendo ninguna limitación por parte del legislador para las actividades ahí reguladas. Tampoco lo disponen así la Ley Orgánica de Aviación Civil y la Ley Marítimo Portuaria.

Tal situación no significa que deba procederse de manera inmediata a la supresión o confidencialidad del dato negativo, sin considerar aspectos jurídicos y materiales que se encuentran íntimamente ligados a los efectos derivados de la supresión del dato; pues no debe dejarse de lado que si bien, la normativa de transporte no dispone que la persona que pretenda realizar alguna actividad ahí regulada debe carecer de antecedentes policiales, pueden existir supuestos en los que dada la naturaleza de la actividad, conocer el antecedente policial de la persona que realizara una actividad es relevante para salvaguardar otro tipo de derechos.

Esto es así, debido al tipo de delito cometido en su momento por el apelante y el bien jurídico que el mismo protege, es decir la libertad sexual, de una persona mayor de quince años de edad y menor de dieciocho años; es decir, adolescente en los términos de las Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), dicha norma en su Art. 12 regula el Principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, según el cual: "En la interpretación, aplicación e integración de toda norma; en la toma de decisiones judiciales y



administrativas, así como en la implementación y evaluación de las políticas públicas es de obligatorio cumplimiento el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en lo relativo a su desarrollo integral y el disfrute de sus derechos y garantías...”. Este principio también es reconocido internacionalmente por medio de la Convención de los Derechos del Niño, en su Art. 3, el cual dispone: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una condición primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

En ese contexto, no es viable ordenar la supresión o confidencialidad del dato negativo en los casos en los que la persona posee un antecedente penal por la comisión de algún delito contra la libertad sexual sin conocer de manera delimitada el tipo de actividad que realizara, pues existen algunas en las cuales por la naturaleza de la misma, será necesario relacionarse con niñas, niños y adolescentes y por lo tanto, deba salvaguardarse el interés superior de los mismos.

De ahí que, habiéndose constatado en el expediente relacionado con el presente caso que el apelante requirió la solvencia de antecedentes policiales, para tramites de transporte, se desconoce si el documento será utilizado para transporte escolar o colectivo en cuyo caso existiría de manera inevitable contacto con niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad; o si por el contrario fue solicitado para manejar o trabajar con otro tipo de transporte en donde no sea necesario el contacto con las personas antes mencionadas.

Bajo esa lógica, es importante se le haga constar el antecedente delincuencia al apelante, en su solvencia de antecedentes policiales pese a haber cumplido el período a que se refiere el Art.174-A del Código Penal, pues se desconoce de manera delimitada la actividad para la cual fue requerido y podría utilizarse para otro tipo de actividades en las que sea necesario proteger el interés superior de la niñez y adolescencia.

Esto no implica que la persona que posee un antecedente delincuencia por la comisión de delitos contra la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes, se encuentre condenada perpetuamente; sino que es aquí, en donde el ente obligado en atención a lo dispuesto en el Art. 27 Inc. 2° de la Constitución de la República, tiene la obligación de

incorporar a su normativa aplicable en la emisión de la solvencia de antecedentes policiales y certificación de antecedentes policiales, reglas que permitan salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes y no menoscabar otro tipo de derechos de la persona que solicita la supresión de un dato.

Por lo tanto, una alternativa adecuada sería establecer dentro de su normativa una disposición en donde se establezca para este tipo de casos, luego de haber cumplido el período a que se refiere el Art. 174-A del Código Penal, la solvencia o certificación de antecedentes penales o policiales se emitiera, sin hacer constar el antecedente agregando al final una leyenda, que exprese que dicha solvencia no será válida para empleo o actividades vinculadas con niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

En suma, con base a todo lo anteriormente expuesto es oportuno modificar la resolución emitida por el oficial de información de la PNC, en el sentido que no procede la supresión, confidencialidad tampoco el bloqueo del antecedente delincuencia del apelante, por el delito de estupro, por tratarse de un delito en contra de la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes; asimismo, por desconocerse de manera delimitada la actividad relacionada con transporte que realizará, la cual podría conllevar una relación con este grupo de personas y poner en riesgo el interés superior de estos.

C. Decisión del Caso.

a) Modificar la resolución emitida por el oficial de información de la PNC el 25 de mayo de 2018, por las razones mencionadas.

b) Ordenar a la PNC a través de su oficial de información, que dentro del plazo de **10 días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución modifique la resolución objeto de la controversia en los términos señalados en el literal a), de la parte decisión del caso de esta resolución.

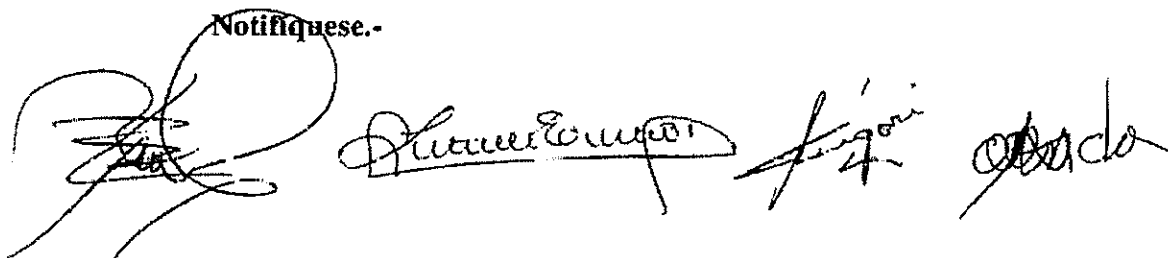
c) Requerir a la PNC, que en el plazo de veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo señalado en el literal anterior, remita a este Instituto el informe de cumplimiento de la presente resolución. Este informe también podrá ser remitido por vía electrónica a la dirección: oficialreceptor@iaip.gob.sv.



d) Remitir el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para que verifique la ejecución de esta resolución.

e) Publíquese esta resolución, oportunamente.

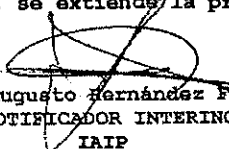
Notifíquese.-



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.

CT/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los veintidós días del mes de agosto de dos mil diecinueve.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR INTERINO
IAIP

